

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

El primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **FEDERICO ÁNGEL OSPINA RÚA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** (en adelante PROTECCIÓN S.A), y a la **NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES** tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-003-2019-00102-01.

#### AUTO

De conformidad con la documentación allegada al plenario por el apoderado judicial del MINISTERIO DE HACIENDA junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia, se reconoce personería al abogado FRANKY STEVAN PINILLA CÓRDOBA portador de la T.P. 335.764 del C.S. de la judicatura para representar a la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO como apoderado general.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos,

#### 1. ANTECEDENTES:

El demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la nulidad de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

**Como fundamento fáctico de sus pretensiones** relata el actor que nació el 25 de noviembre de 1957, y que se afilió al ISS el 21 de agosto de 1980, hasta el 28 de

febrero de 1996, y posteriormente en marzo de 1996 se trasladó al RAIS por medio de la AFP PROTECCIÓN S.A.

Expone que el asesor de PROTECCIÓN S.A. solo le indicó que el valor de la pensión por vejez sería superior al que recibiría en el ISS y que además podría pensionarse antes de cumplir los 62 años, pero no le brindaron ningún tipo de asesoría adecuada y verídica, ni la información completa respecto a que el valor de la pensión en el RAIS dependía del capital consignado en la cuenta de ahorro individual. Además, indica el actor, que, el 23 de enero de 2009 recibió reasesoría pensional por parte de PROTECCIÓN S.A. donde después de realizarle el cálculo actuarial le sugieren que se traslade nuevamente al ISS hoy COLPENSIONES, pues le resultaba más favorable económicamente, por lo que de común acuerdo con la asesora de PROTECCIÓN S.A. suscribió el formulario de traslado de régimen.

Manifiesta que el 8 de agosto de 2011 se quedó sin empleo, razón por la cual desde esta fecha no le ha sido posible obtener nueva vinculación, por lo que el 20 de junio de 2014 solicitó a PROTECCIÓN S.A. el reconocimiento y pago de la pensión anticipada de vejez, por ello PROTECCIÓN S.A. procedió de conformidad, a partir del 30 octubre de 2014 a reconocer la prestación, con cuantía mensual de \$3.141.280, bajo la modalidad de retiro programado.

Indica que puesto se encontraba inconforme reclamó al fondo la reliquidación de la mesada, recibiendo respuesta desfavorable de PROTECCIÓN S.A.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

La *a quo* despachó desfavorablemente todas las pretensiones de la demanda, absolviendo de las mismas a COLPENSIONES y a PROTECCIÓN S.A., y condenó en costas al demandante, incluyendo agencias en derecho a favor de todas las demandadas.

Para negar las pretensiones, la juez argumentó que frente a la ineficacia de la afiliación existen varios pronunciamientos de la CSJ, como la SL 19447 de 2017, 4954 de 2018, 1452 de 2019, 1688 y 1689 de 2019, según las cuales las AFP desde el momento mismo de su creación tenían el deber de documentar clara y suficientemente los efectos que acarreaba el cambio del régimen, no obstante en Sentencia SL 373 de 2021, la Corte consideró que no es viable que un pensionado del RAIS vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado al RPM, en consideración a que

la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico que no es razonable revertir o retrotraer porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectarían a múltiples personas.

Expone que si bien no se demostró que PROTECCIÓN hubiese cumplido con el deber legal de asesoría para la data que el demandante decidió trasladarse de régimen pensional en 1996, en el plenario se demostró que el demandante ostenta la calidad de pensionado, pues conforme la prueba documental, el día 20 de junio de 2014 el demandante solicitó a PROTECCIÓN S.A. la pensión anticipada de vejez, que le fue reconocida bajo la modalidad de retiro programado sin negociación de bono pensional a partir del 30 de octubre de 2014 con una mesada inicial de \$3.141.280 con 13 mesadas al año.

Por lo anterior manifiesta la *a quo*, que no es jurídicamente viable declarar la ineficacia de la afiliación al RAIS, ni mucho menos la eficacia de la solicitud de retorno al RPM presentada ante el ISS en el año 2010, toda vez que el demandante goza del estado de pensionado, acordó y aceptó las condiciones para disfrutar de la pensión bajo dicha modalidad, ha venido percibiendo la mesada pensional a partir del 1º de noviembre de 2014, por lo que de alguna manera ha estado desfinanciando el capital inicial de su cuenta de ahorro individual y en caso de acoger las pretensiones de la demanda se generaría un déficit financiero en el RPM.

Adicionalmente aduce que quedó demostrado en el plenario que en demandante no presentó solicitud de traslado al RPM en el límite temporal establecido en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, lo que impide declarar que la solicitud de traslado radicada en el año 2010 fue eficaz y por ende surgió efecto.

### **3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

La sentencia fue apelada por la apoderada judicial del demandante expresando que la sentencia proferida por el despacho se basó en no declarar la ineficacia del traslado realizado en 1996, argumentando que el trámite ante el ISS lo debía realizar el demandante, y que simplemente se llenó un formulario donde manifestaba así su voluntad, pero no obstante al existir este formulario que se aporta como prueba y que contiene una casilla donde se expresa que si hay voluntad o no de trasladarse al ISS, la cual fue diligenciada por el demandante y no cabe duda de dicha manifestación, y adicionalmente en dicho formulario no se expresa en ninguna parte la obligación por parte del actor de realizar el trámite adicional ante el ISS, y no hay prueba que

PROTECCIÓN le hubiera hecho esa advertencia al demandante, de indicarle que debía hacer dicho trámite ante el ISS, y mucho menos que el actor así lo comprendiera.

#### **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados del demandante y del MINISTERIO DE HACIENDA allegaron escrito de alegatos, expresando resumidamente lo siguiente:

##### **ALEGATOS DEL DEMANDANTE.**

“Está claro en este averiguatorio que mi mandante estuvo vinculado en pensiones al ISS; que se trasladó a la AFP PROTECCIÓN y en una reasesoria de la misma entidad manifestó antes de cumplir los 52 años de edad, por consejo de la misma administradora, su intención de devolverse al ISS; que se pensionó por PROTECCIÓN y que pidió en esta demanda la ineficacia del traslado a PROTECCIÓN o la eficacia del traslado al ISS y el pago de perjuicios causados al actor por la falta de información culpable de la parte accionada.

En el caso de autos, la parte que represento, pese a no compartirlo, respeta el concepto de la jurisdicción en cuanto no es viable la ineficacia del traslado de los pensionados expresado en la sentencia SL 373 del 2021 del Corte Suprema de Justicia; pero también creemos que la base de esta apelación es la cualificación y la vía que la misma sentencia plantea, cuando determina que si bien no procede la ineficacia del traslado de los pensionados, el remedio judicial para ellos es el pago de perjuicios :

*“Lo anterior, no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho aquel según el cual quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora. El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños.*

*Este principio conmina al juez a valorar la totalidad de los daños irrogados a la víctima y en función de esta apreciación, adoptar las medidas compensatorias que juzgue conveniente según la situación particular del afectado. Es decir, el juez, en vista a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas*

*aquellas medidas que considere necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados.”*

Como lo expresa la sentencia, el juez debe valorar los daños generados por la culpa de la administradora del RAIS y como lo ordena el C.P. del T. en su art. 49, como director de proceso debe tomar las medidas conducentes a la reparación integral de la víctima, en este caso el pensionado, el cual pese a mantenerse pensionado en el RAIS, ha sufrido un desmedro patrimonial por un menor valor de la pensión en dicho régimen frente a la posible pensión en el RPMPD.

Y es que, para dar cumplimiento a la solución que determina la Sala Laboral, la determinación de los perjuicios puede hacerse de varias maneras: o en forma oficiosa por el juez o generando una sentencia in genere que ordene liquidar los perjuicios, que en síntesis y en forma simple son muy fáciles de determinar pues son la diferencia entre la pensión que tiene el actor y la que tuviese en caso de haber sido pensionado por el ISS ( Hoy Colfondos) y de hecho, a folios 17 y 18 la misma demandada PROTECCIÓN es clara al hacer los cálculos en donde consta la diferencia entre la pensión del ISS y la del fondo demandado.

Es de anotar que la sentencia SL 373 es del año 2021 y que la demanda en este caso se presentó en el año 2019, de modo que era imposible prever para la parte accionante un cambio de jurisprudencia por la Sala Laboral de la Corte, que tuvo desde el año 2008 la tesis que se prohíja en la demanda, de modo que la parte que represento no podría asumir la carga del cambio de tesis jurisprudencial; pero pese a ello la demanda, aun desconociendo la novedosa tesis, es clara al pedir los perjuicios veamos:

“OCTAVA- Condenar a la AFP PROTECCIÓN S.A, al pago de los perjuicios ocasionados con la omisión del traslado al régimen de prima medida con prestación definida.”

Y es que, este es el quid del asunto, pues si bien Protección hizo la reasesoria; el actor, una persona que creyó en la misma entidad y su actuar, manifestó en el formulario obrante a folio 19 su voluntad de traslado y la misma entidad en un mail que obra a folio 24 (que la juez desconoce cómo documento pese a la presunción legal y constitucional de autenticidad), reconoce que el afiliado manifestó su voluntad y que de buena fe obró siempre el actor , quejándose la asesora de la demandada de situación del actor y a quien nunca se le informó la obligación de hacer el traslado, tal como en forma certera y clara lo dice el señor FEDERICO en su declaración de parte, siendo igualmente claro el actor en que se le debió afiliar al ISS.

En conclusión: la reasesoría de Protección, en forma incompleta fue la causante culposa del perjuicio irrogado al actor, quien hoy devenga una pensión del mismo fondo, que no llega al veinte por ciento (20%) del salario del cual salieron los aportes para la misma pensión.

En este caso la juez de primera instancia, manifiesta que no puede estudiar la culpa porque no “se estructuró la pretensión” lo cual no tiene asidero alguno en el expediente ni en la realidad, porque la pretensión es clara y concisa y en la situación fáctica es de meridiana claridad, cuando al actor se le ha generado un perjuicio mayor en su vida y de por vida, pues la afectación del mínimo vital del señor OSPINA es latente.

De modo Honorables Magistrados que, en el presente caso, en aras al desarrollo y mandato imperativo de la sentencia pluricitado, ruego a ese despacho se revoque la condena y se condene a la parte demandada al pago de los perjuicios causados a mi cliente que son el mayor valor de la pensión a la cual tuviere derecho de haber sido bien asesorado y de haber sido tramitado el traslado de fondos cuando oportunamente lo solicitó, esto es antes de cumplir los 52 años de edad.

#### **ALEGATOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.**

El MHCP en sus alegatos indica que no existe fundamento jurídico alguno para atender favorablemente las pretensiones del demandante en lo concerniente a este Ministerio teniendo en cuenta que este no tiene competencia para decidir sobre solicitudes de reconocimientos y pago de derechos pensionales de sus afiliados, ni es competente para determinar la afiliación o traslado de las personas entre los regímenes, por otro lado PROTECCIÓN S.A. solicitó la emisión y expedición del bono pensional del demandante, solicitud que fue atendida favorablemente, por lo que el Ministerio de Hacienda procedió a pagar el bono pensional modalidad 2, por medio de la resolución N° 21047 el 22 de noviembre de 2019, sin que actualmente exista tramite pendiente por atender por parte del Ministerio.

Expone que de ser válido el traslado del demandante al RPM, es necesario que la AFP PROTECCIÓN S.A. reintegre a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor reconocido y pagado por concepto de bono pensional Tipo A, dado que este es reconocido única y exclusivamente a las personas que se encuentran afiliadas al RAIS.

Finalmente solicita confirmar la sentencia de primera instancia, por encontrarse ajustado a derecho y a la jurisprudencia, y se opone a cualquier condena en su contra.

## **5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:**

El problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si es legalmente procedente declarar la ineficacia del traslado del demandante del RPM al RAIS, y si de ser procedente la referida ineficacia, debe condenarse a Colpensiones a seguir pagando al demandante la pensión de vejez.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes.

## **6. CONSIDERACIONES:**

Se resolverá el recurso de apelación, atendiendo el principio de consonancia que establece el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 en virtud del cual las decisiones de segunda instancia se circunscriben exclusivamente a los asuntos objeto del recurso.

Para resolver la apelación del demandante, primeramente, se ha de señalar, que, como lo señaló la *a quo*, y lo reconoce el recurrente, en este asunto se presenta una situación especial, referida a que el demandante confiesa en la demanda y en el interrogatorio de parte, y además se encuentra acreditado documentalmente de folios 26 y 27 del expediente (documento 02 del expediente digital), que se le reconoció pensión anticipada de vejez de parte de PROTECCIÓN S.A.

Teniendo en cuenta lo anterior, en primera medida, y al margen del análisis sobre el cumplimiento del deber de información que describe el recurrente en la demanda, encuentra pertinente la Sala acoger, una vez más, la sentencia de unificación proferida por la Sala Especializada Laboral de este Tribunal el 14 de agosto del año 2019, en el proceso con radicado 05001-31-05-007-2015-01295-01, Magistrado ponente ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, en observación a lo previsto en el inciso último del artículo 35º del Código General del Proceso, concordante con el también último inciso del artículo 10º del Acuerdo PCSJA17-10715 del 25 de julio de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura, con la que se fijó precedente judicial unificado con relación a la ineficacia del traslado de régimen de quien ostente la calidad de pensionado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, providencia en la que se anotó lo siguiente:

*“Este universo fáctico descrito por la Corte no incluye a los pensionados, pues aunque una de las sentencias fundadoras de esta línea trató de un pensionado que se trasladó a PORVENIR, se trata de un caso disanalógico, no inscrito en el precedente, por cuanto se trataba de una persona expresamente excluida del régimen de ahorro individual, al tener más de 55 años a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral, estando inmerso en el contenido del ordinal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993.*

*(...)*

*Pero las calidades de afiliado y pensionado ya han sido deslindadas por la Corte Constitucional, precisamente en un fallo con un claro enfoque consecuencialista. Al examinar la exequibilidad del artículo 107 de la Ley 100 de 1993, que limitaba la posibilidad de los pensionados de trasladarse entre administradoras, la Corte arguyó lo que se esbozará enseguida. Esta es la disposición: Art. 107. CAMBIO DE PLAN DE CAPITALIZACIÓN O DE PENSIONES Y DE ENTIDADES ADMINISTRADORAS. Todo afiliado al régimen y que no haya adquirido la calidad de pensionado, podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro pensional a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado, o trasladarse a otra entidad administradora.*

*Tal como se señaló anteriormente, el artículo 107 de la Ley 100 de 1993 busca alcanzar al menos dos fines claramente identificables: (i) garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente de los recursos del régimen de pensiones de ahorro individual con solidaridad; y (ii) asegurar la estabilidad financiera y la rentabilidad de las inversiones de la entidad administradora o aseguradora.*

*Estos dos fines están estrechamente ligados a los fines constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad que orientan la prestación y ampliación de la cobertura de la seguridad social, en general, y del sistema general de pensiones, en particular. Por ello, garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente y asegurar la estabilidad y la sostenibilidad del sistema, constituyen fines legítimos y constitucionalmente importantes en un Estado Social de Derecho como el colombiano.*

*Es plausible que la diferenciación de las calidades de afiliado y pensionado a partir de los argumentos que se han expuesto y de toda la legislación que claramente los diferencia, verbi gratia, los artículos 13, literales b), e) y d), 87, 115 y 117 de la Ley 100 de 1993, permita apartarse del precedente de la Sala Laboral de la Corte sobre ineficacia de la afiliación, entendiendo que se está ante universo fáctico diverso cuando se trata de ciudadanos que ya se han pensionado.*

*Este Tribunal, a través de su Sala Primera de Decisión Laboral, con ponencia del Magistrado Hugo Alexander Bedoya Díaz, realizó una fértil distinción entre el momento de la afiliación y aquel en que se empieza a disfrutar la pensión, que refuerza la razonabilidad del enfoque que en el caso que nos ocupa. Dice así la providencia, con radicado 00873, proferida el 18 de septiembre de 2018, que constituye un comienzo de precedente horizontal:*

*Ahora, retrotrayéndonos al estudio de la improcedencia de que se declare la inexistencia del traslado en este caso en particular, la sala se remite a la sentencia SL 17595-2017 con radicado 46.292 MP Dr. Fernando Castillo Cadena en donde en forma concreta se dijo “... Así, en el asunto bajo escrutinio, brilla por su ausencia, los deberes y obligaciones que la jurisprudencia ha trazado en aquellos casos de traslado entre regímenes, entre los cuales se destaca: (i) la información que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional; (...),” entendiéndose con este último aparte de la providencia que si la información exigida data desde antes de la afiliación y hasta las condiciones del disfrute de la pensión, ello implica, que una vez reconocida la*



*pensión de vejez esa falta de información se entiende superada con la celebración del nuevo acto jurídico adelantado por la afiliada y que corresponde a la solicitud de la pensión de vejez a la sociedad Porvenir S. A y al reconocimiento y pago de la prestación económica, pues solo tenía la posibilidad de alegar la falta de información previo al disfrute de la prestación económica y no con posterioridad a ella, como ocurre en este evento.*

*Por último, ha de reiterarse por esta Sala que sostener la tesis de la ineficacia de la afiliación para pensionados del régimen de ahorro individual es un camino que puede conducir a situaciones del todo insostenibles, por cuanto la consolidación de ese nuevo estatus supone en muchos casos la participación de terceros de buena fe, como cuando se ha optado por pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia y se ha contratado con una aseguradora su pago. Las palabras de la Corte Constitucional, en la mentada sentencia C-841 de 2003, acuden con autoridad para esclarecer ese reductio ad absurdum. (...)*

Asimismo, ha de señalarse que, en la Sentencia de Unificación antes citada, se trae a colación, el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, que establece, que la obligación de las AFP no se ciñe solamente a la antesala del traslado, sino también: “*durante toda la vinculación y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado*”, norma que permite inferir que una vez solicitada la prestación económica de vejez ante la AFP PROTECCIÓN y obtenido el disfrute de la misma, la falta de información en el traslado inicial entre regímenes pensionales se refrendaría o convalidaría, ya que se trata de un nuevo acto jurídico acaecido el 20 junio de 2014, fecha en la cual el demandante le solicitó a la AFP PROTECCIÓN S.A. le reconocieran el pago de la pensión de vejez de forma anticipada conforme al documento de folio 25, a lo que PROTECCIÓN S.A. accede reconociendo la prestación a partir del mes de noviembre de 2014, como se anota en certificado emitido por PROTECCIÓN S.A. que milita a folios 26 y 27 del plenario, prestación que fue ingresada a nómina de pensionados a partir de noviembre de 2014 conforme se indica en la certificación obrante a folios 26 a 27 del expediente digitalizado, aspectos que no puede pasar por alto esta superioridad, pues en los documentos referenciados se plasma la voluntad de la accionante de acceder a la pensión de vejez del RAIS.

La pensión se financió inicialmente con los ahorros existentes en la cuenta de ahorro individual y posteriormente con el bono pensional pagado mediante Resolución N° 21047 del 22 de noviembre de 2019 según se informó por parte de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al dar respuesta a la demanda en los folios 28 a 34 (Documento 10 del expediente digital) , suscribiendo el actor con la solicitud de la pensión un nuevo acto jurídico con efectos particulares y concretos, razón por la cual, una vez comenzó el disfrute pensional a partir de noviembre del 2014 (folios 26 a 27), adquirió el actor plenamente la calidad de

pensionado, y por ende, siguiendo el criterio jurisprudencial sentado por este Tribunal se hace improcedente la declaratoria de ineficacia deprecada en la demanda.

Esta posición fijada por este Tribunal ha sido avalada por la Corte Suprema de Justicia, Corporación en reciente sentencia SL 373 de 2021, en la que abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado en el RAIS, de la siguiente manera:

*“Es un hecho acreditado que Cárdenas Gil disfruta de una pensión de vejez desde el año 2008, en la modalidad de retiro programado, a cargo de Protección S.A. Esta circunstancia conduce a la Corte a interrogarse si es posible, bajo el manto de la ineficacia de la afiliación, que el demandante pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad, vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado al RPMPD.*

*Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto.”*

Ahora, se entiende que de una manera confusa la apoderada del actor en la apelación, reclama es que se le dé validez a la decisión que habría tomado el actor en el año 2010 de regresar al RPM, afirmando que PROTECCIÓN S.A., no le informó al demandante que debía realizar ante el ISS los trámites para materializar su regreso al RPM

Respecto del anterior asunto, revisado el expediente se encuentra a folio 19 del expediente digital (archivo No. 2) un formulario titulado “REASESORÍA PENSIONAL” fechado el 23 de enero de 2009, en el que se marca una casilla en la que la decisión del afiliado es que se traslada al ISS, fecha para la cual el demandante aún podía regresar al RPM por no haber cumplido los 52 años de edad, pues nació el 25 de noviembre de 1957, sin embargo a folios 21 aparece otro formulario radicado en el ISS por el actor el 09 de marzo de 2010, solicitando su regreso al ISS, cuando ya contaba con más de los 52 años, lo que legalmente le impedía regresar al ISS, conforme la preceptiva del literal e) del artículo 2 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, por faltarle menos de 10 años para llegar a la edad de obtener la pensión de vejez en el RPM a los 62 años, por lo que no es posible despachar

favorablemente la pretensión que se declare la eficacia de traslado o regreso del demandante al RPM del ISS hoy COLPENSIONES, solicitado el 09 de marzo de 2010.

Ahora, que PROTECCIÓN S.A. haya ilustrado o no al demandante de cómo debía materializar su regreso al RPM, no haría variar la decisión, pues no podría COLPENSIONES asumir ninguna responsabilidad por ello.

De otra parte, no es entendible cómo el actor alega que no pudo regresar el RPM porque no se le ilustró sobre el procedimiento, cuando en el año 2014, a los 56 años de edad solicitó y obtuvo el reconocimiento de la pensión de vejez en el RAIS, habiendo podido antes que solicitar la pensión, demandar su regreso al RPM, y no hacer uso del beneficio del RAIS de poder pensionarse 6 años antes de llegar a la edad de los 62 años en los que se pensionaría en el RPM.

Finalmente, en cuanto a lo planteado por la apoderada del demandante en los alegatos de esta instancia, que es consciente que no es procedente la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, pero que en cambio se debe imponer condena a PROTECCIÓN S.A. por los daños y perjuicios sufridos por el demandante en cuanto a la diferencia en el monto de su pensión de vejez, es evidente que este es un asunto que no fue objeto de pretensión, por lo que no podía ser decidido en este caso, toda vez que ello violentaría los derechos de contradicción y defensa de PROTECCIÓN S.A.

En razón a las consideraciones de hecho y derecho expuestas en precedencia, se confirmará la decisión del Juez de primera instancia de negar la declaratoria de ineficacia del traslado de la demandante al RAIS, o que se declarara la eficacia de traslado o regreso del demandante al RPM del ISS hoy COLPENSIONES, solicitado el 09 de marzo de 2010.

Las COSTAS en esta instancia están a cargo del demandante por haber resultado vencido en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.000.000, repartida en partes iguales ente los demandados.

## **7. DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia del 25 de octubre de 2021 proferida por el JUZGADO VEINTICUATRO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso promovido por el señor **FEDERICO ÁNGEL OSPINA RÚA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, y la **NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES**.

**SEGUNDO: COSTAS** en esta instancia a cargo del demandante y en favor de las demandadas. Las agencias en derecho, las estima el ponente en la suma de \$1.000.000, repartida en partes iguales ente los demandados.

La anterior sentencia se notifica a las partes por EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Código de verificación: **4f34b605f8e39f89d270a548974f4ac108f8d6e10aed489c0fdf505973de196f**

Documento generado en 01/12/2022 02:32:51 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**